

aula libre

EDITA: FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA - CGT - NOVIEMBRE 2011.

IDEAS

La educación: ni gasto, ni inversión. Un derecho

RAFAEL FENOY RICO



Todas las fotos corresponden a la manifestación estatal en Madrid del 22 de octubre por la enseñanza pública / DE DAVID FERNÁNDEZ



Las aguas educativas vienen revueltas en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP. Los anuncios de recortes, primero, y las reducciones en el número de profesorado, después, han desatado la indignación de éste, que año a año ha visto como se le exigía más y mejores resultados escolares, a pesar de contar con menos recursos humanos y materiales para ello.

Los sociopolíticos y algunos sindicatos oficiales se aprestan a recoger la publicidad de esa justa indignación, remachando machaconamente que no se deben recortar gastos en educación, porque realmente ésta no es un gasto sino una “inversión”. Profetizan la quiebra de todo el sistema público educativo, cosa nada difícil de hacer, con datos objetivos sobre la mesa y pretenden reconducir, con la inestimable ayuda del ministerio socialista esta conflictividad en réditos electorales a meses vista.

Ni los sociopolíticos, ni los sindicalistas oficialistas, mosqueados por los recortes de las liberaciones, que se erigen en propagandistas de tal objetivo, están legitimados para ello. Han sido cómplices de años de privatizaciones en los servicios públicos, por acción u omisión, y además, tampoco tienen claro que la Educación, con mayúsculas, no es un bien mercantil que deba ajustarse a las inhumanas leyes del mercado. La Educación no es una mercancía y por tanto no se puede “invertir en ella”. La Educación es un derecho y por tanto, se les llena la boca, desde el monarca al último mono ministerial, diciendo que España es un Estado de Derecho, no hay más que hablar. Podremos prescindir de aeropuertos provincianos ruinosos, de fastuosas obras faraónicas, de decenas de miles de sueldos a políticos incapaces, incluso de los gastos, ahora sí, de las Casas Reales, de las subvenciones a iglesias religiosas, políticas o sindicales, etc, pero lo que es sagrado para la ciudadanía son los derechos fundamentales a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a una vida digna desde el nacimiento hasta la muerte. Este es el gran asunto, del que aún no se han enterado, y que equivocada e interesadamente confunden, convirtiendo en mercancía nada menos que los básicos derechos de la ciudadanía, que al fin y a la postre son los únicos que sostienen la delgada línea roja de este contrato social que se sostiene en la simple y equilibrada ecuación (igualdad) de que pagamos impuestos siempre y cuando ello permita, ejercer nuestros derechos. La revuelta está servida, si se sigue por el camino de mercantilizar la dignidad de un pueblo.

Cuando el profesorado protesta, en forma mayoritaria, que nadie llegue a conclusiones precipitadas, como lo hace alguna relevante política del PP, ya que debería seguir la máxima de que aquel que “espera, desespera”. Punto primero: no son personas, las que se dedican a la docencia, faltas de preparación o de inteligencia. En segundo lugar, tampoco pierden el norte fácilmente y saben que la docencia se debe a la educación de sus alumnas y alumnos, que además las madres y los padres de estos se preocupan, como es su obligación, por aquello que perturbe el normal desarrollo de las clases. Y en tercer lugar, no son personas que, animadas por un espíritu gremial, pongan el interés de toda la sociedad, a la que sirven de verdad, por detrás de mezquinos intereses relacionados esta vez con impartir dos horas más de clase. Por ello, la ciudadanía debe escuchar sin prejuicios lo que estos/as inteligentes y formados/as ciudadanos/as nos dicen y valorar con enorme preocupación, que estas personas no vean otra salida que la protesta y la huelga, para hacer entrar en razón a políticos y políticos que nada saben de este honroso oficio del magisterio y que además, tienen una torticera visión mercantilista de la Educación.

ANÁLISIS

La crisis y los recortes sociales y laborales

EMILI CORTAVITARTE CARRAL

Es evidente que la crisis económica es una buena excusa para justificar nuevos recortes sociales (educación, sanidad, pensiones, dependencia, inserción social...) y laborales (salarios, condiciones de trabajo, contratos, formación, prestaciones por desempleo y jubilación...)

En nuestro sector (como en sanidad) es unánime la consigna de los grandes partidos políticos y de todos los gobiernos (central y autonómicos) de que se mantendrán los parámetros del Estado del bienestar. Sin embargo, los informes oficiales (en este caso el Panorama de la Educación 2011, elaborado por la OCDE) siguen siendo testarudos: el gasto público en educación en España en el 2008 era del 4,6% del PIB, mientras que la media la Unión Europea y de los estados más desarrollados del planeta era del 5,4%.

Además este curso, por primera vez en los últimos 30 años, desciende el gasto público total (la suma de todas las Administraciones) en educación, según las previsiones del Ministerio de Educación. A lo largo de los años, el esfuerzo en relación con el producto interior bruto ha fluctuado, pero en todo este tiempo nunca había bajado de un año para otro el gasto total, el 88% del cual depende de las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación ha revisado a la baja las estimaciones de gasto educativo en 2010 y 2011. La cifra del año pasado queda en 52.741,5 millones y la de este año en 52.254,9, lo que supondría un 1,5% de bajada en dos años. En porcentaje del PIB, la inversión baja de la cota del 5% que había alcanzado en 2009 para situarse en 4,79% este año. Una tendencia inédita que coincide con un incremento de 165.154 alumnos a los que atenderán una cifra desconocida, pero inferior, de profesores.

La distribución del porcentaje de inversión por territorios es completamente dispar, pero sigue una línea maestra: los gobiernos de los territorios con mayor porcentaje de privada concertada, que generalmente tienen un PIB más alto, son quienes porcentualmente asumen menor gasto público en educación: Madrid, Catalunya, Balears, La Rioja, Euskadi, Navarra...

Lo cierto es que, en la inmensa mayoría de territorios, estamos asistiendo a una continuada degradación de la educación pública como derecho social y de nuestras condiciones laborales como trabajadores y trabajadoras.

En el primer aspecto, la mayoría de gobiernos autonómicos han procedido a una drástica reducción (amparada en la crisis) de aspectos que constituían una mejora de la calidad:

- dotaciones directas a los centros para su funcionamiento,
- formación del profesorado,
- servicios educativos y centros de profesores,
- programas diversos (innovación tecnológica, ordenadores para alumnos/as, conciliación y resolución de conflictos, reciclaje de libros...),
- becas de libros y comedor,
- personal de administración y servicios,
- personal de apoyo (técnicos/as de educación infantil, técnicos/as de inserción social, equipos de asistencia psicopedagógica...)
- sustituciones del personal de administración y servicios y del personal de apoyo

...
En cuanto a nuestros derechos y condiciones laborales, los gobiernos central y autonómicos

han introducido evidentes elementos de empeoramiento:

- Reducción salarial (entre el 5 y el 7%) desde el segundo semestre del año pasado, reducción salarial (todas las mensualidades y las pagas extras con reducción respecto al primer semestre de 2010) y aumento de la pérdida de capacidad adquisitiva en el presente año.
- Pérdida de las condiciones de jubilación anticipada a los 60 años (la nueva normativa,

entre los/as expulsados/as del sistema y los/as no contratados/as a pesar del aumento de alumnos y alumnas,

- Empeoramiento de las condiciones generales, como consecuencia de la reducción de plantillas: funcionarios y funcionarias de carrera que han perdido su plaza definitiva; funcionarios y funcionarias con destino provisional que siguen un año más en tal situación; ha habido menos plazas de oposiciones

lleven sus hijos e hijas a la concertada. O, la consellera d'educació del gobierno de CiU puede concertar una línea más a un centro del Opus (dedicado exclusivamente a alumnado masculino) al tiempo que niega la construcción de nuevas escuelas públicas en la misma localidad, l'Hospitalet de Llobregat.

Ante este panorama, sin duda ampliable en función de las diversas realidades, la Federación de Enseñanza de la CGT (y sus sindica-



aún no publicada, sin duda seguirá la línea marcada por la reforma de las pensiones – pactada por UGT y CCOO- a nivel general aumentado a partir de 2013 la edad de jubilación anticipada y se eliminan las gratificaciones extraordinarias por tener 28 o más años de servicio)

■ Aumento casi generalizado de la carga lectiva: más horas directas de clase –a pesar de que trabajamos en el Estado de la OCDE que ya tenía el horario lectivo más amplio- y, como consecuencia, mayor carga de trabajo –preparación, corrección, evaluación-. Estos aumentos van desde la hora más en infantil, primaria y secundaria en Catalunya, a las 3 horas de más en infantil y primaria en Galicia, pasando por las 2 de más en secundaria en Madrid.

■ Mayor masificación en las aulas, debida tanto a la reducción de las plantillas como a la vulneración de las ratios establecidas por ley o a las estrictas normativas para la creación de grupos clase –especialmente en secundaria: bachilleratos, ciclos formativos...-
■ Reducción de los refuerzos, desdoblamientos, horas B, atenciones individualizadas, aulas de acogida...

■ Reducción considerable de las plantillas: debemos tener en cuenta que entre 18 y 20 horas lectivas más en secundaria suponen un profesor o profesora de menos y que entre 23 y 25 horas lectivas más en infantil y primaria suponen una maestra o maestro menos. Se calcula entre 12.000 y 15.000 maestros/as y profesores/as (según se vayan concretando al-

gunas medidas), entre los/as expulsados/as del sistema y los/as no contratados/as a pesar del aumento de alumnos y alumnas,

■ Mayor precarización del profesorado interino: nombramientos telemáticos, sustituciones de 1/3 de jornada, mayor disponibilidad geográfica y funcional...

Todo ello en un momento en el que se está produciendo una mayor matriculación en la educación pública (más de 165.000 alumnos/as más) En buena medida, como consecuencia de la crisis: familias que no pueden seguir pagando la privada concertada, alumnos y alumnas en edad juvenil que anteriormente abandonaban los estudios y entran en precario en el mercado laboral y personas adultas en paro que tratan de formarse o de obtener titulaciones que no consiguieron en su anterior escolarización.

Tampoco encontraremos un paralelismo entre los sacrificios que debe hacer la pública (y quienes trabajamos, estudiamos o llevamos a nuestros hijos e hijas) y los que debe soportar la privada concertada y las familias que optan por ella (los trabajadores y trabajadoras, sí) Así, mientras el recorte en profesorado de secundaria en Madrid se calcula que puede suponer una reducción del gasto de 80 millones de euros, el gobierno de Esperanza Aguirre sigue manteniendo unos 90 millones de euros en subvenciones a las familias (con ingresos inferiores a 100.000 euros anuales) que

debe plantear una respuesta contundente y contraria a cualquier recorte social y laboral:

✘ promoviendo el análisis y la crítica en nuestro sector: hojas informativas, carteles, pegatinas, web...

✘ promoviendo el análisis y la crítica entre la comunidad educativa y en los ámbitos sociales: charlas por clases, para asociaciones de padres y madres, en asociaciones de vecinos, centros sociales...

✘ fomentando la autoorganización y las decisiones asamblearias del profesorado para la movilización: asambleas de centro, zonas, generales

✘ utilizando las Juntas de Personal y las relaciones intersindicales para procurar un frente común que potencie una calendario de movilizaciones amplio y sostenido

✘ convocando todas las movilizaciones (concentraciones, manifestaciones, huelgas...) que consideremos oportunas y que el profesorado demande.

✘ fomentando plataformas sociales en defensa de la enseñanza pública.

✘ procurando confluir con otros sectores en lucha, especialmente sanidad.

✘ participando en las movilizaciones generales: 15M, defensa servicios públicos...

✘ plantearnos y plantear a otras organizaciones sindicales y sociales una huelga sectorial y/o general.

Emili Cortavitarre Carral, Sindicato de Enseñanza de Barcelona

MANIFIESTO

La comunidad educativa debe decir basta

FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA - CGT

CGT ha venido insistiendo desde 2008 en la gravedad de la crisis económica, que evidentemente no ha sido provocada por los trabajadores y trabajadoras. CGT ha venido denunciando que tanto el Gobierno Central como los de la mayoría de las CCAA han procedido a una drástica reducción del dinero para atender los servicios públicos de educación y sanidad, así como de los demás sistemas de protección social. CGT hace más de un año promovió una Huelga General por ese motivo. El Gobierno de España ha utilizado los recursos públicos para tapar los déficits de los Bancos. Déficits generados solo y exclusivamente por su codicia. Este Gobierno lleva años reduciendo los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y trabajadores. En educación es a partir de 2009 cuando comienzan recortes y recortes, dejando en la calle a miles de profesoras y profesores interinos, hurtando puestos de trabajo para oposiciones y amortizando 9/10 partes de las jubilaciones y exceden-

cias. Centros que estaban ya aprobados y presupuestado no se han construido aludiendo a la falta de dinero, pero mientras tanto, han seguido y siguen concertando a los privados. Para CGT, los recursos económicos de toda la ciudadanía que se utilizan para el funcionamiento de la educación o la sanidad, las pensiones y el cuidado de mayores no son gastos, ni inversiones, SON DERECHOS que no pueden en modo alguno recortarse. Antes de tocar estos derechos se cierra hasta la Casa Real, no se cobra por cargos políticos, ni helicópteros para precampañas, ni gastos de representación... CGT reivindica la austeridad más absoluta para garantizar esos derechos. En la CGT creemos firmemente que es precisamente esta etapa de crisis, la que nos brinda la oportunidad para que la educación sea la encargada de asegurar estos derechos fundamentales y el principal agente para sentar las bases de un progreso social cohesionado. Un sistema de Educación igualmente homologado permitirá asumir ese trascendental papel histórico. Por

ello, urge que exista un estatuto docente homologador de las tareas educativas, de los derechos y deberes de todas las personas que trabajamos en educación y de paso, que asegure la dignificación de la función docente y garantice los derechos de familias y alumnado a una educación para la libertad y la dignidad humana. Es pues necesario **que todo el profesorado, trabajadoras y trabajadores no docentes, familias y jóvenes escolarizados/as, LA COMUNIDAD EDUCATIVA sigamos movilizándonos en torno a la lucha:**

- ✦ por acabar con las actuales políticas de recortes de recursos humanos en educación;
- ✦ por una educación que garantice la real igualdad de oportunidades;
- ✦ por el reconocimiento del profesorado como principal activo de todo el sistema educativo y
- ✦ por ello, la necesidad de garantizar el derecho a un empleo digno a todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación.



INTERINOS

Nos toca luchar... organizados

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CGT CASTILLA Y LEÓN- PROFESORADO INTERINO

Madrid 3.000 interinos a la calle, Andalucía 1.700, Castilla-La Mancha 1.500, Galicia 1.200, Navarra 800,... Como la cuerda siempre rompe por la parte más débil, es a nosotros, al profesorado interino, a quienes afecta la tijera de forma más directa y más traumática: dejándonos en la calle.



Ya llevábamos algunos años sufriendo podas más o menos sibilinas, aunque algunas de ellas bastante agresivas para ciertos colectivos, pero ni cualitativa ni cuantitativamente se pueden comparar con la tala actual. Esta situación tiene su origen, hasta el momento y de manera fundamental, en los brutales recortes de personal y otras medidas como la ampliación de horario lectivo, que recientemente han empezado a aplicar varias Comunidades Autónomas, al socaire de la consabida crisis. Pero la cosa no va a quedar ahí, el límite en la reposición de efectivos y la eliminación de la jubilación LOE van a provocar por una parte y de forma inmediata, una reducción a cifras ridículas, cuando no a la congelación, de la oferta de empleo; y, por otra, un colapso del empleo interino puesto que el número de jubilaciones en los próximos años se va a reducir de forma considerable: sólo se va a jubilar el profesorado por enfermedad, por la edad o por la Ley de la Función Pública. Si a esto añadimos otras medidas como ajustes en grupos de diversificación, restricciones en la cobertura de determinadas sustituciones, negativa a desdobles, abuso de normativa de afines en secundaria, obligación en Infantil y Primaria -si estás habilitado- de impartir horario de especialidades distintas a la que accediste por Concurso..., es fácil darse cuenta que la guerra al personal interino está servida. El momento que estamos viviendo es crucial para todos, pero de forma muy especial para interinos e interinas. A todo lo dicho con anterioridad hay que sumar que -pese al anuncio de retirada del borrador por parte de Gabilondo- se va a seguir cocinando, en el ámbito estatal, el nuevo modelo de acceso a la Función Pública Docente, analizado y criticado por parte de CGT, y el Estatuto Docente. Tenemos que actuar ahora. Es necesario elaborar una Plataforma -referida al ámbito estatal y al de los distintos territorios- que no les deje las manos libres a quienes se van a sentar a negociar. No tienen ningún derecho a hacerlo sin contar con nosotros/as. Y, por supuesto debemos estar organizados/as y tener prevista la respuesta para cualquier agresión a nuestros derechos.

CASTILLA Y LEÓN

Organizarnos, plantarles cara

COORDINADORA DE EDUCACIÓN DE CGT DE CASTILLA Y LEÓN

El curso pasado, en mayo, la Coordinadora de Educación de CGT de Castilla y León denunciaba que el sindicalismo VIP de la enseñanza se atribuía, sin demasiadas razones para hacerlo, el éxito de haber conseguido el compromiso de la Junta de abrir un proceso negociador para principios de este curso 2011-2012. El argumento fundamental para nuestra denuncia era que el Pacto del 2006 llevaba más de un año de prórroga, y la "negociación" había venido impuesta por ese calendario.

Ya estamos a final de octubre, bien avanzado el primer cuatrimestre del curso, y parece que ese compromiso se ha quedado en agua de borrajas. Con el agravante de que, ya sabemos que la Junta de Castilla y León, sin haber llegado a los extremos de otras comunidades, ha aplicado también – a la chita callando – la tijera a los presupuestos educativos:

- Suspensión de ejecución de infraestructuras presupuestadas.
- Paralización prácticamente total de inversión en nuevas infraestructuras.
- Aumento de la carga lectiva en la mayoría del profesorado.
- Reducción de cupo de profesorado

rado en numerosos centros.

- Eliminación de un número muy importante de grupos de diversificación.
- Falta de cobertura de bajas por razón de matrimonio.
- Tardanza sistemática de una semana en sustituciones de todo tipo de bajas.
- Reducción escandalosa de las horas destinadas al programa "Mentor" de los Centros de Adultos
- Traspaso a empresas privadas de algunas de las tareas que venían desempeñando los Ayudantes Técnicos Educativos
- Precarización de las condiciones laborales del profesorado interino.
- Recortes sustanciales de apoyo económico a Escuelas Infantiles.

Todo esto, en relación al programa de reducción del gasto del año 2011 de mil millones de euros, que el presidente Herrera mantenía en secreto y que han tenido que arrancarles recientemente con gancho.

Todavía desconocemos el presupuesto de 2012. El gobierno regional – para echar balones fuera – argumenta que no lo puede elaborar sin saber los ingresos que va a tener de la administración central.

En CGT nos tememos lo peor. Sabemos que la verdadera razón para

haber intentado mantener ocultos los recortes del 2011 y para no desvelar los que nos tienen preparados para el 2012, es de carácter puramente electoralista. El 20-N será el punto de inflexión.

En fin, que su intención es seguir recortando, y lo van a intentar. Si de verdad pretendemos dar la batalla en contra de la reducción de nuestros salarios y de los recortes de los presupuestos de educación en nuestra Comunidad, contra el deterioro continuo de nuestras condiciones de trabajo, contra el trato de favor a los empresarios de la enseñanza privada, contra los recortes de plantillas, contra la racanería de las ofertas de empleo, contra la precariedad del profesorado interino, ..., tenemos que tomarlo bastante más en serio y partir de planteamientos sustancialmente distintos.

Estamos obligados a organizarnos y plantarles cara. A la Consejería de Educación, al gobierno regional, ..., pero también a quienes después de haber anunciado a bombo y platillo el éxito del compromiso de negociación del final del curso pasado, ahora mantienen un silencio cómplice.



ARAGÓN

Ni recortes ni privatización de servicios educativos

FEDERACIÓN ARAGONES DE SINDICATOS DE ENSEÑANZA DE CGT

El inicio del curso escolar en Aragón nos está dejando un importante número de recortes, tanto de personal como de programas educativos. En la reunión de este verano entre la nueva Consejera de Educación y los sindicatos de la Mesa Sectorial, se nos prometió que no habría recortes hasta el curso 2012/13, es decir pasadas las Elecciones Generales. Promesa incumplida, ya que al igual que en Navarra, Castilla la Mancha, Galicia y Madrid se están recortando plazas de profesores/as, horas y sobre todo programas educativos.

La diferencia con estas Comunidades, es que aquí los recortes son "invisibles", y ni las familias ni los medios son conscientes de la gravedad del tema.

- Nos han llegado recortes en los CPRs a nivel de asesorías y colaboraciones didácticas, sobre todo orientadas hacia las TIC.
- Centros donde no se cubren vacantes, aumento de horas lectivas, supresión de Comisiones de Servicio, de horario de Bibliotecas...
- Programas suprimidos como Saber leer, Aula de Cine, Escuela 2.0, Ma-

temáticas Vital... Importancia de los programas

Todo esto va en detrimento de la educación, pero también supone una reducción drástica del número de docentes, sobre todo interinos.

Especialmente grave es la situación de las contratadas educativas que dependen de la DGA, tanto el tema de Auxiliares de Educación Infantil que han sido despedidas y muchas de cuyas plazas no han sido cubiertas por la nueva empresa contratadora, con la excusa de que no se llega a la ratio para cubrir esa plaza, cuando según nos informan de varios Centros, no es cierto. Como la situación en los CPRs donde las plazas de becarios contratados anteriormente por DGA para prestar ayuda técnica en el tema de las TICs, han pasado a depender de una contrata a una empresa privada, lo que ha supuesto reducción de horas y precariedad económica a esos/as colaboradores/as.

En Educación de Adultos no se ha firmado el convenio que regula las aportaciones de DGA y diputaciones provinciales para dotar las plazas de las aulas municipales, dependientes de los CPEPA.

Junto a estos graves recortes, se

suma el anuncio de la Consejera de la posibilidad de concertar el Bachillerato y el ciclo 0-3, ciertos que supondrían una reducción de plazas de profesorado, y la financiación con dinero público de la Escuela Privada-Concertada.

La política educativa del PP en el tema económico es muy clara, y Madrid es la punta de lanza de esta política privatizadora con graves recortes en todo el Sistema Público (enseñanza, sanidad...) pero sin recortar un duro en el sistema privado, sobre todo en la educación privada-concertada, que no ha visto recortada ni su partida económica estatal ni sus plantillas laborales.

CGT Enseñanza considera inaceptables estos recortes, que se suman a los que ya ocurren en otras Comunidades gobernadas por el PP. Asistimos a un recorte global contra el Sistema Público por parte del PP.

CGT ha defendido y defiende la educación pública y que los fondos públicos vayan a este fin y no a la privada. También rechazamos rotundamente las privatizaciones de los Servicios Educativos.

